JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-2399/2025

PONENTE: MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, *** de agosto de dos mil veinticinco.

Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por **Juan Manuel Pablo Ortiz**, **confirma** la resolución definitiva dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-270/2025.

ÍNDICE

GLOSARIO	1
I. ANTECEDENTES	2
II. COMPETENCIA	3
III. PRESUPUESTOS PROCESALES	3
IV. ESTUDIO DE FONDO	4
¿Cuál es la pretensión del actor?	4
¿Qué resolvió la autoridad responsable?	4
¿Cuáles son los agravios del actor?.....	5
¿Qué decide esta Sala Superior?	6
V. RESUELVE.....	10

GLOSARIO

Actor:	Juan Manuel Pablo Ortiz.
Autoridad responsable o Tribunal local:	Tribunal Electoral de Veracruz.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INE:	Instituto Nacional Electoral.
Instituto local u OPLE:	Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
Juicio ciudadano o de la ciudadanía:	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
LGIFE o Ley Electoral:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
PEL:	Proceso Electoral 2024-2025 para la elección de diversos cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
TSJ:	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

¹ **Secretario instructor:** Fernando Ramírez Barrios. **Secretario:** Gabriel Domínguez Barrios. **Colaboró:** Mario Iván Escamilla Martínez.

I. ANTECEDENTES

De los hechos narrados en la demanda y de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente.

1. Jornada electoral. El uno de junio² se celebró la jornada electoral del PEL de Veracruz.

2. Declaración de validez y asignación de constancias. El treinta de junio el Consejo General del OPLE aprobó el acuerdo por el cual efectuó el cómputo estatal, declaró la validez de la elección de las quince magistraturas del TSJ y asignó las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras³.

En lo que interesa, asignó la constancia de mayoría de magistrado en materia familiar a favor de –entre otros– Emmanuel Pérez Espinoza.

3. Juicio local. El cuatro de julio el actor, ostentándose como candidato a magistrado en materia familiar del TSJ, impugnó el acuerdo anterior; particularmente contra la asignación de constancia de mayoría a favor de Emmanuel Pérez Espinoza, por considerar que incumplía con el requisito de elegibilidad consistente en demostrar contar con, al menos, cinco años de experiencia en materias afines al cargo.

4. Sentencia impugnada. Seguidos los trámites de ley, el dieciséis de agosto el Tribunal local dictó sentencia por la que confirmó el acuerdo controvertido⁴.

5. Demanda. El veinte de agosto el actor presentó demanda ante el Tribunal local en contra de la resolución indicada.

6. Turno. En su oportunidad, la magistrada presidenta acordó integrar el expediente, registrarlo con la clave **SUP-JDC-2399/2025** y turnar el asunto

² Todas las fechas corresponden a dos mil veinticinco, salvo mención expresa.

³ Acuerdo OPLEV/CG293/2025.

⁴ En los autos del juicio TEV-JDC-270/2025.

a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda, tuvo por desahogado el trámite de Ley, declaró cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio, toda vez que se trata de un medio de impugnación relacionado con la elección de una magistratura del Poder Judicial de una entidad federativa, que integra el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con competencia territorial estatal⁵.

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 1/2025 relativo a la distribución de los asuntos que conocerá esta Sala Superior y las Salas Regionales, vinculados con personas juzgadoras de las entidades federativas.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

La demanda de juicio de la ciudadanía reúne los requisitos de procedencia⁶ de conformidad con lo siguiente:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito, en ella se hace constar el nombre y la firma del actor; asimismo, se precisa el acto impugnado, los hechos y motivos de la controversia.

2. Oportunidad. La demanda fue presentada en tiempo, pues la resolución impugnada fue notificada al actor el dieciséis de agosto⁷ y el medio de

⁵ De conformidad con los artículos 18, primer párrafo y 30 de la Ley Número 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Similar criterio se estableció al resolver el SUP-JDC-1487/2025, el SUP-JDC-2314/2025 y el SUP-JDC-2353/2025 y acumulados, entre otros.

⁶ Previstos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios

⁷ Cfr. fojas 418 y 419 del expediente judicial de origen.

impugnación lo presentó el veinte siguiente; es decir, dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley de Medios para el efecto⁸.

3. Legitimación e interés jurídico. El actor cuenta con legitimación e interés jurídico, porque comparece por su propio derecho, en su calidad de actor en el juicio ciudadano que dio origen a la sentencia impugnada.

4. Definitividad y firmeza. De la normativa constitucional y legal aplicable se advierte que no hay otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

IV. ESTUDIO DE FONDO

¿Cuál es la pretensión del actor?

El promovente **pretende** que se revoque la sentencia impugnada que confirmó la asignación de la constancia de mayoría a favor de Emmanuel Pérez Espinoza y, en consecuencia, se revoque tal asignación y se le asigne a él la constancia de mayoría como magistrado familiar del TSJ.

Su **causa de pedir** la sostiene, principalmente, en que el Tribunal local indebidamente confirmó el acuerdo del OPLE por el cual tuvo por cumplido el requisito de elegibilidad de Emmanuel Pérez Espinoza consistente en acreditar contar con una **práctica profesional en un área jurídica afín al cargo de, cuando menos, cinco años**⁹; pues –a consideración del actor– debió determinarse que el indicado candidato ganador no acreditó cumplir con el requisito señalado y, en consecuencia, que era inelegible para ocupar el cargo de mérito.

¿Qué resolvió la autoridad responsable?

Confirmó el acuerdo controvertido al calificar de inoperantes los agravios del actor, en virtud de que estimó que el requisito constitucional de contar con una práctica profesional de, cuando menos, cinco años en una materia

⁸ En el entendido de que, en términos del párrafo 1 del artículo 7 de la Ley de Medios, todos los días y horas son hábiles, al estar relacionada la presente controversia con el proceso electoral local en curso en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

⁹ Previsto en la fracción II del artículo 58 de la Constitución local.

jurídica afín al cargo no era, propiamente, un requisito de elegibilidad, sino **de idoneidad**, por lo que su valoración y verificación era exclusiva de los Comités de Evaluación en la etapa de registro de las candidaturas y, en ese orden, el OPLE carecía de atribuciones para revisar su cumplimiento al momento de calificar la elección.

Lo anterior, de conformidad con el criterio adoptado por esta Sala Superior al resolver el SUP-JIN-337/2025 y acumulado, en el que se estableció que la autoridad electoral solo puede revisar los requisitos de elegibilidad, que son condiciones de legalidad objetiva y verificable que inciden en la validez formal de una candidatura; de manera que a tal autoridad no le corresponde evaluar la idoneidad de quienes hubieren sido postulados, en tanto que dicha valoración fue delegada por el Constituyente Permanente a los Comités de Evaluación.

De esta manera, estimó que el Consejo General del Instituto local actuó conforme a Derecho al aprobar el acuerdo controvertido en la materia de impugnación, ya que no le correspondía analizar el requisito constitucional de idoneidad relacionado con la práctica profesional de al menos cinco años en un área jurídica afín a la candidatura, pues el mismo fue analizado en su momento por los Comités de Evaluación respectivos.

¿Cuáles son los agravios del actor?

El actor se duele de lo siguiente:

1. Indevida aplicación del criterio de la ejecutoria SUP-JIN-337/2025 y acumulados. Al considerar que el Tribunal local lo aplicó de manera genérica, e inaplicó una porción normativa del texto constitucional sin hacer una interpretación conforme, pues para la entidad de Veracruz debe considerarse que **el requisito constitucional en análisis no es de idoneidad, sino de elegibilidad**, ya que a las magistraturas del TSJ se les encomienda revisar los actos emitidos por jueces de primera instancia, por lo que resulta necesario que tengan la experiencia de por lo menos cinco años en su materia.

Además, porque la comprobación de tal requisito no requiere de mayor análisis, como lo sostuvo el tribunal responsable, pues en el caso particular del candidato electo cuya elegibilidad cuestionó, se advierte de constancias que su práctica profesional en nada ha tenido que ver con lo familiar.

Igualmente, porque el Tribunal local aplicó retroactivamente el precedente indicado, porque retardó injustificadamente la emisión de su sentencia más de un mes, para aplicar un criterio

emitido por la Sala Superior que fue dictado con posterioridad a la fecha de presentación de su demanda en el juicio de origen.

2. Violación a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de un recurso efectivo. Fundamentalmente porque, al considerar que el requisito constitucional de experiencia mínima es de idoneidad y, por tanto, revisable únicamente por los Comités de Evaluación, lo coloca en estado de indefensión al implicar que ya no es posible revisarse por el OPLE al momento de calificar la elección.

3. Falta de exhaustividad. Porque la autoridad responsable no dio contestación al agravio de su demanda por el que argumentó que, en virtud del principio de interés superior de la infancia, el Tribunal local tenía el deber de observar que las personas juzgadoras – particularmente las magistraturas en materia familiar– cumplieran con el requisito constitucional de experiencia mínima de cinco años **en materia familiar**.

¿Qué decide esta Sala Superior?

Decisión

Debe **confirmarse** el acto impugnado, porque los agravios planteados son **infundados**, en virtud de que el requisito de contar con una experiencia mínima de cinco años en un área jurídica afín al cargo es un requisito de idoneidad; además, porque no existió falta de exhaustividad en la sentencia impugnada.

Justificación

a. Marco jurídico

Esta Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que, en el marco de los procesos de elección de personas juzgadoras mediante voto popular, es indispensable distinguir con claridad entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad, dado que ambos tienen naturalezas, funciones y mecanismos de verificación distintos, así como autoridades competentes diferenciadas.

Los requisitos de elegibilidad son aquellos que la Constitución y las leyes establecen como condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas para que una persona pueda contender por un cargo público.

Entre estos requisitos se encuentran la nacionalidad, la edad, la residencia, el no haber sido condenado por delito doloso; los cuales son verificables *ex ante* y su cumplimiento puede ser constatado por la autoridad electoral al

momento de registrar candidaturas o calificar los resultados de una elección. En el caso de magistraturas del Tribunal Superior estos requisitos están previstos en el artículo 58 de la Constitución local.

Por otra parte, los requisitos de idoneidad son de carácter cualitativo, técnico y valorativo. No se refieren simplemente a condiciones objetivas, sino a la evaluación de competencias, capacidades, méritos, trayectoria, formación y ética profesional de las personas aspirantes.

El cumplimiento de estos requisitos de idoneidad no es susceptible de verificarse a través de criterios mecánicos o registrales, sino que requiere procesos especializados de evaluación técnica y valorativa, como entrevistas análisis curricular exámenes o deliberación colegiada.

En el caso de la normativa de Veracruz, en la fracción II, inciso b), del artículo 59 de la Constitución local, se establece que corresponde a los comités de evaluación de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), proponer las ternas de personas juzgadoras, asegurando que quienes las integran cuenten con la idoneidad requerida para desempeñar el cargo, como se lee de su contenido:

“ ...

b. Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas honorables de reconocido prestigio en el ámbito de la actividad jurídica que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificarán a los mejores perfiles, en función de los que cuenten con mayores conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y preparación académica y profesional en el ejercicio de la actividad jurídica; y...”

Como se advierte, la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas candidatas para los diversos cargos el Poder Judicial, corresponde de manera exclusiva a los comités de evaluación, por disposición expresa de la norma constitucional de dicha entidad.

Estos comités, por tanto, son los órganos facultados para verificar la idoneidad en los términos constitucionales, no así el órgano administrativo electoral local.

b. Caso concreto

El actor se duele de diversas violaciones cometidas por el Tribunal local en la sentencia impugnada; sin embargo, se advierte que todas las hace depender de la premisa consistente en que el requisito constitucional de contar con experiencia mínima de cinco años en un área jurídica afín al cargo es un requisito de elegibilidad y no de idoneidad.

Lo anterior lo sostiene en que a las magistraturas del TSJ se les encomienda revisar los actos emitidos por jueces de primera instancia, por lo que resulta necesario que tengan la experiencia de por lo menos cinco años en su materia y porque la comprobación de tal requisito no requiere de mayor análisis, como lo sostuvo el tribunal responsable, sino que es constatable de la simple revisión del expediente.

En tal lógica se duele de la indebida aplicación de un precedente de esta Sala Superior y de la vulneración a un recurso judicial efectivo porque el Tribunal local no revisó el cumplimiento de tal requisito.

Ahora bien, los planteamientos del actor son **infundados** porque –como fue considerado por la responsable– el requisito de contar con una experiencia mínima de cinco años en un área jurídica afín al cargo es un requisito de idoneidad, cuya verificación es exclusiva de los comités de evaluación de los Poderes del estado en la etapa correspondiente.

En efecto, ha sido criterio sostenido de este Máximo Tribunal en Materia Electoral que los requisitos de idoneidad para ocupar algún cargo de persona juzgadora son de naturaleza cualitativa y valorativa, implican la evaluación de competencias, trayectoria, formación y ética profesional, y requieren procesos técnicos como entrevistas, análisis curricular o deliberación colegiada.

En este entendido, esta Sala Superior ha reiterado igualmente que la **práctica profesional en un área jurídica afín** al cargo al cual se pretende contender es un **requisito de idoneidad**, al estar vinculado con la trayectoria, competencia y capacidad de la persona aspirante y, por tanto, implicar un valor cualitativo en el ejercicio de lo jurídico, cuya calificación

requiere de una apreciación objetiva y técnica, encomendada por el Constituyente Permanente a los órganos técnicos denominados comités de evaluación de los Poderes del estado¹⁰.

Por tanto, no le asiste razón al actor al argumentar que este requisito previsto en la fracción II del artículo 58 de la Constitución local es de elegibilidad y no de idoneidad, en tanto que quienes deben acreditar su cumplimiento serán magistraturas que revisarán, en segunda instancia, sentencias de jueces locales, por lo que resulta necesario que tengan experiencia en su materia de al menos cinco años.

En el mismo sentido, el actor no desvirtúa las consideraciones del Tribunal local que lo llevaron a sostener que éste es un requisito de idoneidad, ni justifica cómo es que, el hecho de que las magistraturas familiares serán competentes para revisar sentencias de primera instancia en materia familiar implique que la experiencia mínima de cinco años sea un requisito de elegibilidad y no de idoneidad.

Además, el actor se equivoca al sostener que la experiencia mínima requerida por la Constitución local debe acreditarse, en el caso de magistraturas de lo familiar, precisamente en la materia familiar, y no en alguna otra; pues, de conformidad con el indicado artículo 58, fracción II, de la Constitución local, la experiencia mínima mencionada debe acreditarse respecto de materias afines y no necesariamente respecto de aquélla por la que se busca contender.

Igualmente, es **infundado** el alegato de falta de exhaustividad de la resolución impugnada por falta de contestación al agravio relacionado con el principio de interés superior de la infancia, por el que se sostuvo que el Tribunal local tenía el deber de observar que las personas juzgadoras – particularmente las magistraturas en materia familiar– cumplieran con el requisito constitucional de experiencia mínima.

¹⁰ Véanse, por ejemplo, las ejecutorias SUP-JDC-2302/2025 y SUP-JDC-2353/2025 y acumulados.

SUP-JDC-2399/2025

Esto, porque el tribunal responsable sí dio respuesta al agravio indicado, calificándolo de inoperante, en tanto que en esa instancia la materia de impugnación fue el acuerdo del Consejo General del OPLE que asignó la constancia de mayoría al candidato ganador y, en esa medida, el Tribunal local se pronunció sobre el requisito de experiencia mínima en el contexto del análisis realizado por el OPLE.

Finalmente, se advierte que el actor fue omiso en la instancia local en aportar mayores elementos para acreditar el incumplimiento de este requisito de idoneidad por parte del candidato ganador cuya elegibilidad cuestionó, ajenos a los que ya obraban en poder del OPLE al momento de revisar los requisitos de elegibilidad en el acuerdo impugnado.

En efecto, el promovente se limitó a ofrecer el expediente administrativo del candidato cuestionado, integrado con motivo de su solicitud de registro a candidato a magistrado de lo familiar del TSJ, el cual obraba en poder del Instituto local y fue exhibido en la instancia jurisdiccional; sin que exhibiera mayores elementos de convicción, ni controvirtiera –en su caso– de manera particular alguna o algunas de las constancias de tal expediente de registro, objetando su contenido o alcance.

En este orden, procede **confirmar** el acto impugnado.

Por lo expuesto y fundado se:

V. RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma** la sentencia controvertida.

Notifíquese según Derecho.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes, y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por *** de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de la presente ejecutoria y de que se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

NOTA PARA EL LECTOR

El presente proyecto de sentencia se publica a solicitud del magistrado ponente, en términos del Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos para la publicación de los proyectos de resolución por parte de los integrantes del Pleno de las Salas de este Tribunal Electoral.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN